REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÒN
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
TUNJA – BOYACÁ
j03epmstun@cendoj.ramajudicial.gov.co

TUTELA 150013187003 **2026 00082** 00

Tunja, catorce (14) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Se allega hoy 14 de octubre del 2026, el oficio No. 4778 del 7 de octubre de 2026 emanado de la secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior Del Distrito Judicial informa que, en cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en Interlocutorio 664 del 5 de octubre de 2026, proferido por el Honorable Magistrado doctor RICARDO ALONSO ARCINIEGAS GUTIÉRREZ, resolvió:

> *"… DECLARAR la nulidad de todo lo actuado, incluso del auto que avocó conocimiento, proferido al interior de la presente acción de tutela promovida por el señor Luis Alfonso Ortiz Fernández, a través de apoderado judicial, en contra de la Comisión Nacional de Servicio Civil y la Superintendencia Nacional de Salud, a la cual se vinculó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dejando incólumes las pruebas allí practicadas…"*

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el escrito de tutela presentado por el abogado Dr. **ÁLVARO DE JESÚS ESMERAL GÓMEZ** identificado con C.C. [redacted] de Santa Marta y T.P. No. [redacted] del C. S. de la J., en representación de los intereses del señor **LUIS ALFONSO ORTIZ FERNÁNDEZ** identificado con C.C. No. [redacted] de Pacho, Cundinamarca, y las aclaraciones previas, se dispone a admitirla, toda vez que cumple con los requisitos señalados en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1.991, se ordena adelantar el trámite establecido en el artículo 15 Ibídem.

Vincúlese en debida forma a la **SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y a la COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL.**

En consecuencia, se notificará y correrá traslado en forma inmediata a la accionada de la presente acción de tutela y sus anexos, para lo cual se le concederá el término de **dos (2) días** contados a partir del recibo de las

comunicaciones, para que procedan a dar respuesta a la misma y alleguen las pruebas que pretenden hacer valer; advirtiéndoles que los informes se consideran rendidos bajo la gravedad del juramento, conforme al artículo 19 del Decreto 2591 de 1.991.

Prevéngase a las entidades accionadas que si los informes no fuesen rendidos dentro del plazo correspondiente se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano tal como lo consagra el art. 20 ibidem.

Se tendrán como pruebas las allegadas por la accionante y demás que el despacho considere pertinente practicar.

De otra parte, por estimar que pueden tener interés en la decisión que habrá de tomarse en el presente asunto, se dispondrá la vinculación a las personas que hacen parte del proceso de selección del Sistema Específico de Carrera Administrativa de las Superintendencias de la Administración Pública Nacional – Proceso de Selección No. 2504 de 2023 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS" en el cargo Código OPEC No. 199654, denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 y demás personas que tengan interés legítimo en el resultado de esta acción de tutela puedan participar o intervenir en el presente trámite constitucional, garantizando así el derecho de contradicción y defensa. Para tal efecto, se ordenará la publicación de la presente acción constitucional en la página web de los accionados.

DE LA MEDIDA PROVISIONAL SOLICITADA

Según el art. 7 del Decreto 2591 de 1991, es posible que Juez de Tutela ordene medidas provisionales con el fin de conservar o asegurar la protección del derecho o evitar que se produzcan consecuencias más gravosas, igualmente se ha establecido por parte de la jurisprudencia (Auto 166 de 2006 de la Corte Constitucional) que esas medidas provisionales se podrán dictar desde la presentación de la demanda de tutela y hasta antes de proferirse sentencia, medida que igualmente puede ser revocada en cualquier momento.

Al accionante solicita se decrete como medida provisional y se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS mientras se resuelve la acción constitucional se abstenga de proveer mediante nombramientos provisionales, encargos o cualquier otra modalidad temporal las vacantes definitivas correspondientes al empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, así como los empleos equivalentes que puedan ser cubiertos con la lista de elegibles vigente. Igualmente, se le ordene conservar las vacantes definitivas existentes y abstenerse de adoptar decisiones administrativas que impidan la utilización de la lista de elegibles.

De otro lado, solicita se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS allegue un informe detallando el número exacto de cargos del empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 existentes

en la planta, el número de cargos actualmente ocupados mediante nombramiento provisional, el número de vacantes definitivas, el número de empleos sin proveer, las vacantes surgidas con posterioridad a la expedición de la lista de elegibles, las actuaciones adelantadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para obtener la utilización de la lista de elegibles ente otros

Refiere las medidas son razonables, proporcionales y respetuosas de las competencias constitucionales tanto de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS como de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues no sustituyen sus funciones ni definen anticipadamente el derecho reclamado; únicamente evitan que la inactividad administrativa haga ilusoria la protección constitucional solicitada.

Sobre la procedencia de las medidas provisionales, la Corte Constitucional en Sentencia en la sentencia T-103 de 2018, indicó:

> *"...El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991[1] autoriza al juez constitucional para que adopte, a petición de parte o de oficio, "cualquier medida de conservación o seguridad". La jurisprudencia de la Corte ha comprendido que la oportunidad que tiene el funcionario judicial para pronunciarse sobre la protección provisional va desde la presentación de la acción de tutela hasta antes de pronunciarse definitivamente en el fallo[2], "pues al resolver de fondo deberá decidir si tal medida provisional se convierte en permanente, esto es, definitiva o si por el contrario, habrá de revocarse"[3].*
>
> *La protección provisional está dirigida a[4]: i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio;*
> *ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está facultado para "ordenar lo que considere procedente" con arreglo a estos fines (inciso 2º del artículo transcrito).*
>
> *Las medidas provisionales cuentan con* ***restricciones****, debido a que la discrecionalidad que entraña su ejercicio no implica un poder arbitrario u omnímodo. Por ello, la expedición de esa protección cautelar debe ser* ***"razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada"***[5]. Se resalta.

Con lo expuesto, no se logra determinar de manera clara y certera en qué consistiría el perjuicio irremediable inevitable en los próximos días, el Despacho anuncia que lo peticionado se resolverá de fondo en el término expedido máximo de 10 días hábiles, garantizando el derecho a la defensa de las accionadas, aunado a recopilar mayores elementos de conocimiento.

La Corte Constitucional ha puntualizado en las exigencias requeridas para que, de manera anticipada, se emita orden inmediata provisional, como impedir que un eventual amparo se torne ilusorio, o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, lo cual, se itera, no se advierte en el presente asunto.

Por ende, NO SE DECRETARÁ LA MEDIDA PROVISIONAL solicitada por el Dr. ÁLVARO DE JESÚS ESMERAL GÓMEZ.

Por lo expuesto, el **JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA,**

RESUELVE

PRIMERO-. OBEDECER lo resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, en auto Interlocutorio T- 018 del 22 de julio de 2026 que declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio dentro de la presente acción constitucional.

SEGUNDO-. ADMITIR la demanda de tutela instaurada por el abogado Dr. ÁLVARO DE JESÚS ESMERAL GÓMEZ identificado con C.C. [redacted] de Santa Marta y T.P. No. [redacted] del C. S. de la J., en representación de los intereses del señor LUIS ALFONSO ORTIZ FERNÁNDEZ identificado con C.C. No. [redacted] de Pacho, Cundinamarca. VINCÚLESE a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y a la COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. Córraseles traslado en forma inmediata de la presente acción de tutela y sus anexos concediéndole un término de dos (2) días, contados a partir del recibo de las comunicaciones para que procedan a dar respuesta a la misma y alleguen las pruebas que pretendan hacer valer; advirtiéndole que los informes se consideran rendidos bajo la gravedad del juramento conforme al artículo 19 del Decreto 2591 de 1.991.

Prevéngase a las accionadas y vinculadas que, si el informe no fuese rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano tal como lo consagra el art. 20 ibidem.

Por estimar que pueden tener interés en la decisión que habrá de tomarse en el presente asunto, se dispondrá la vinculación a las personas que hacen parte del proceso de selección del Sistema Específico de Carrera Administrativa de las Superintendencias de la Administración Pública Nacional – Proceso de Selección No. 2504 de 2023 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS" en el cargo Código OPEC No. 199654, denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 y demás personas que tengan interés legítimo en el resultado de esta acción de tutela puedan participar o intervenir en el presente trámite constitucional, garantizando así el derecho de contradicción y defensa. Para tal efecto, se ordenará la publicación de la presente acción constitucional en la página web de los accionados.

TERCERO-. NO DECRETAR LA MEDIDA PROVISIONAL solicitada por el Dr. ÁLVARO DE JESÚS ESMERAL GÓMEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. – Téngase como pruebas las allegadas por el accionante el Dr. ÁLVARO DE JESÚS ESMERAL GÓMEZ.

QUINTO. – COMUNÍQUESELE esta decisión a las partes y al Representante del Ministerio Público, vía correo electrónico.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

p/LS

Firmado Por:

Giovana Patricia Fajardo Prieto

Juez (e)

Juzgado De Circuito

Ejecución 003 De Penas Y Medidas De Seguridad

Tunja - Boyaca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d9b02f9d264f4dcc83c61774d2c0c6fc88d69b6ceb534eb048928b75ac291001**

Documento generado en 14/10/2026 11:27:57 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica